

## SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

### SENTENCIA

<b>Proceso</b>	: Ordinario de Segunda Instancia
<b>Demandante</b>	: <b>DIANA MARCELA CASAS RUIZ</b>
<b>Demandados</b>	: <b>LA CASA DE LA BELLEZA FRANCESA S.A.S. y</b> <b>ARBEY DE JESÚS HERRERA AGUDELO</b>
<b>Radicado</b>	: <b>05001-31-05-011-2017-00759-01</b>
<b>Providencia</b>	: Sentencia
<b>Temas y</b>	: Laboral Individual –Prestaciones sociales,
<b>Subtemas</b>	indemnizaciones moratorias-
<b>Decisión</b>	: Modifica Sentencia condenatoria
<b>Sentencia No</b>	: <b>166</b>

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión<sup>1</sup>:

### ANTECEDENTES

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...*”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

### **Pretensiones:**

Se solicita **declarar que la demandante Diana Marcela Casas Ruiz y el señor Arbey de Jesús Herrera Agudelo, suscribieron un contrato de trabajo a término fijo** inferior a un año, con fecha de inicio 11 de abril de 2012; **que el empleador fue sustituido por la Sociedad Camilo's SPA S.A.S. hoy La Casa de la Belleza Francesa S.A.S.; que se indicó como fecha de terminación del contrato el 30 de diciembre de 2012,** prorrogándose en tres (3) oportunidades; **que desde el 1° de octubre de 2015 pasó a término indefinido;** finalizando el vínculo el 6 de mayo de 2017, por renuncia provocada por el empleador.

En consecuencia, se **condene** a los demandados de forma conjunta, separada o solidaria, al reconocimiento de la **indemnización por despido indirecto indexada, cesantías, intereses sobre las cesantías, con la sanción por su no pago; primas de servicio e indemnizaciones moratorias consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990.**

### **Hechos relevantes:**

Se afirma en la demanda que **la señora Diana Marcela Casas Ruiz y el señor Arbey de Jesús Herrera Agudelo suscribieron un contrato de trabajo a término fijo el 11 de abril de 2012, sin indicarse el período de duración del mismo;** siendo sustituido el empleador por la Sociedad Camilo's SPA S.A.S. hoy La

Casa de la Belleza Francesa S.A.S.; **que el 28 de abril de 2012 se informó a la actora que el contrato terminaría el 30 de diciembre del mismo año;** prorrogándose en tres (3) oportunidades; que **cambió la modalidad a término indefinido desde el 1º de octubre de 2015; finalizando el vínculo el 6 de mayo de 2017, por renuncia provocada por el empleador.**

Explica que la demandante se desempeñó como Auxiliar administrativa y recepcionista, sin que se le cancelaran primas de servicio, cesantías, intereses sobre las cesantías, ni fue afiliada a un Fondo de cesantías por cuanto se le hacía creer que se le estaba pagando un salario integral. Asegura que no sabe a cuál fondo de pensiones estaba afiliada.

#### **RESPUESTA A LA DEMANDA:**

La parte demandada **a través de apoderada judicial, dio respuesta a la demanda, aceptando el vínculo laboral con la señora Diana Marcela Casas Ruiz y la sustitución de empleador.** Aclara que no cuenta con los documentos del vínculo laboral, toda vez que una vez la demandante presentó la renuncia, la carpeta se extravió de las instalaciones de la sociedad, por lo cual sus mandantes no pueden indicar que el contrato aportado por la actora es el mismo que reposaba en la carpeta.

Aduce que, si bien a la señora Diana Marcela no se le entregaron aportes a la seguridad social, no es de recibo manifieste ignorar a qué fondo de pensiones estaba afiliada, pues era ella la encargada de hacer la cancelación de los aportes; sin ser cierto el

no pago de prestaciones sociales y que se le hizo creer que tenía un salario integral; pues de acuerdo a las pruebas aportadas durante la vigencia del vínculo, le fueron cumplidos sus derechos laborales en efectivo y la liquidación de las prestaciones, constando la firma de la demandante en señal de recibido.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

**El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, declaró que entre la señora Diana Marcela Casas Ruiz y la sociedad La Casa de la Belleza Francesa S.A.S. existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 11 de abril de 2012 y el 6 de mayo de 2017. Condenó a la sociedad La Casa de la Belleza Francesa S.A.S. a reconocer la suma de \$3.200.790,00, por cesantías; \$351.282,00, por intereses sobre las cesantías con la sanción por su no pago; \$1.743.978,00 por prima de servicios; \$38.213.740,00 por moratoria hasta el 31 de agosto de 2021; \$20.876.219,00 por indemnización por la no consignación de las cesantías en un Fondo. Declaró probada la excepción de prescripción con respecto a lo causado con anterioridad al 26 de septiembre del año 2014. Condenó en costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$3.219.300,00.**

Para lo anterior argumentó el *a quo*, que se aceptó por la demandada la existencia del vínculo laboral entre las partes, pero la falta de estipulación escrita sobre el término fijo hace que el contrato laboral se entienda indefinido, tal como lo establece el

artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo por ser esta la forma genérica de la contratación laboral, declarando que la modalidad del contrato de trabajo que unió a las partes fue a término indefinido.

En lo relativo a la tacha formulada por la parte actora respecto a los documentos que dan cuenta de las liquidaciones de prestaciones sociales de la demandante, aportados con la contestación a la demanda, indicó que se requirió a la parte accionada para que aportara los originales de documentos, sin hacerlo; concluyendo el perito grafólogo que no se puede afirmar de manera terminante, que los grafismos cuestionados correspondan o no al desenvolvimiento caligráfico de la señora Diana Marcela Casas, en razón a ser los documentos fotocopias.

Sostiene que se acreditó que la demandada incurría en una mala praxis en el pago a sus trabajadores, lo cual fue confesado en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada y por la contadora en su declaración, al realizarse la cancelación de salarios y prestaciones de manera conjunta; incurriéndose en irregularidades, como el desconocer los períodos de causación, como ocurrió con la prima de servicios, la cual se cancelaba de manera dividida y al momento de causación de la prestación, se descontaba bajo el concepto de anticipos; práctica que considera el *a quo* es ilegal, al no existir la debida autorización del trabajador; contraviniendo lo establecido en el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe al empleador deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador. Explicó respecto a las cesantías, que al tratarse

de un contrato a término indefinido, estas no debían cancelarse directamente a la demandante, sino consignarse en un Fondo de cesantías, por lo cual no se cumplió en este caso con su cancelación conforme se establece en la Ley 50 de 1990. Condenó al reconocimiento de las primas de servicio y de intereses sobre las cesantías aduciendo que la demandada no cumplió con el pago en debida forma, en la medida que fue descontada sin previa autorización de la demandante.

Frente a las indemnizaciones moratorias, indicó que no existió buena fe del empleador, toda vez que no cumplió con el pago de las prestaciones y salarios en los términos de Ley, pues desarrolló una forma de cancelar los mismos, supuestamente por solicitud de sus trabajadores, pero conforme al artículo 53 de la Constitución Política se está ante derechos irrenunciables y no es lo que el trabajador quiera, sino lo que establezca la Ley; por lo cual, al presentarse un desconocimiento sistemático de las obligaciones y no reconocerse las prestaciones sociales en los términos de Ley, procedía la condena a las sanciones moratorias pretendidas.

Concluyó de lo expuesto, que existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido; condenando al reconocimiento de las prestaciones sociales y las indemnizaciones moratorias solicitadas en la demanda.

### **RECURSO DE APELACIÓN:**

**Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la**

**parte demandada formuló recurso de Apelación, oponiéndose al tipo de vinculación**, pues se declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, habiéndose aportado por la parte actora un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, que tiene fecha de inicio el 28 de abril, finalizado el 6 mayo de 2017, por lo cual para prescripción y otros efectos, debió tenerse en cuenta esta última modalidad de contrato y si bien la demandada no cuenta con copia del contrato original, el mismo fue aportado por la parte actora, sin que el hecho de no encontrarse suscrito, invalide su existencia ni da a entender que el vínculo fue a término indefinido.

Respecto a la condena al pago de **intereses sobre las cesantías**, aduce que se demostró con las planillas y recibos, que fueron pagados en efectivo, confesando la demandante en su interrogatorio de parte, que ella misma se cancelaba ese concepto.

Afirma que del dictamen respecto a la tacha de falsedad de los **documentos aportados, se puede concluir que se presumen auténticos**; atendiendo a lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso y al artículo 50A (sic), el cual indica que en todos los procesos, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, por lo cual considera que esos pagos presentados como prueba, al no existir una respuesta contundente de tachar los documentos se deben valorar como documentos auténticos.

Aduce frente a las **sanciones moratorias** que su mandante siempre actuó en todo momento de buena fe, aclarando que el utilizar esa mala praxis a petición de los trabajadores, no da lugar a considerarse hay mala fe. Conforme al postulado constitucional, el principio de la buena fe es la guía de supremacía sobre cualquier supuesto quebranto del obrar humano y la jurisprudencia ha entendido ese principio como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las autoridades públicas, así como entre los particulares y ante aquellas; buena fe que se presume y constituye un soporte esencial del sistema jurídico, siéndole exigible al empleador actuar como un buen padre de familia y en su entender así lo hizo, por requerimiento de su propia trabajadora.

Advierte respecto a la **prima de servicios**, que, si bien se dio una mala praxis, también lo es, se admitió que la demandante se la pagaba en efectivo, de lo cual da cuenta las planillas, a las cuales se restó valor probatorio.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

La apoderada de la parte **demandada** presentó alegatos de conclusión, indicando que de manera errada se argumentó que el contrato de trabajo inició el 11 de abril de 2012, entendiendo por tanto el vínculo a término indefinido, al no existir la determinación de la duración del contrato y éste se tuvo como auténtico, pese a no evidenciarse haber sido suscrito por ambas partes, no estar elaborado en documento con membrete de su mandante, ni poseer



ningún elemento que pueda dar cuenta de la voluntad de éste de suscribirlo; concluyendo que las partes estuvieron unidas por un contrato a término fijo, renovándose de manera automática, sin que por ello se entienda a término indefinido, ya que el aportado como tal, no se encuentra suscrito por ninguna de las partes.

Sostiene que el perito grafólogo no da un concepto que pueda llevar al *a quo* más allá de la duda razonable sobre la tacha propuesta, toda vez que en palabras del perito se hallaron relativas semejanzas en el componente morfológico entre unas y otras grafías, las que no son suficientes para afirmar de manera terminante, que los grafismos cuestionados correspondan o no al desenvolvimiento caligráfico de la señora Diana Marcela Casas; que si bien en materia Laboral, se establece como regla general fallarse en favor del trabajador mediante el principio de favorabilidad -*in dubio pro operario*-, la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-730 de 2014, sostuvo que esa duda “*debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería dable que ante una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el argumento que la primera es la más favorable al trabajador. En ese orden, la seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de las interpretaciones*”; por tanto, al no determinarse con certeza por parte del perito la falsedad del documento, no existe argumento sólido del cual se pueda devenir que los documentos son apócrifos, debiéndose tener como auténticos, lo cual es una manifestación del actuar fundado en la buena fe de sus mandantes; lo cual se dio igualmente, cumpliendo con el pago de salarios y prestaciones sociales. Aclara que con el afán de acatar los requerimientos de su empleada y con una amistad de por medio, estaba convencido que su actuar era correcto al entregarle las cesantías, intereses de las cesantías,

primas y vacaciones; ello con el ánimo de ayudarle y nunca obtuvo algún beneficio por implementar esta práctica.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**; lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

#### **Conflicto Jurídico:**

**El asunto a dirimir, radica en verificar si hay lugar a modificar la Sentencia de Primera Instancia; analizándose: 1) modalidad del contrato de trabajo que unió a las partes, esto es, si fue a término fijo o indefinido; 2) si se demostró pago de los intereses sobre las cesantías; 3) verificar si de acuerdo a lo concluido por el perito grafólogo deben presumirse auténticos los documentos tachados y, 4) la procedencia de revocar la condena a pagar las indemnizaciones moratorias consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente modificar la Sentencia de Primera Instancia;** por las siguientes razones:

**No es objeto de discusión en esta segunda instancia,** la existencia de una relación laboral entre las partes y la sustitución patronal entre los empleadores Arbey de Jesús Herrera y la sociedad La Casa de la Belleza Francesa S.A.S.

**1° Modalidad del contrato:**

Frente al tipo de contrato que existió entre las partes, tenemos que el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, preceptúa que *“El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”*; por su parte, el artículo 46 de la normatividad en cita, regula el contrato a término fijo, precisando que debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente.

Sobre el tema, la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en las Sentencias SL 4084 de 2022 y SL 4936 de 2021 ha precisado que, si el contrato se pactó por tiempo determinado, con un plazo o fecha de finalización cierta e incondicionada, mas no simplemente posible o probable, según lo dispuesto en la norma en cita, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, será uno a término fijo.

En el asunto debatido, **el a quo tuvo en cuenta el contrato, al parecer suscrito por la demandante y el señor Arbey de Jesús Herrera Agudelo desde el 11 de abril de 2012<sup>2</sup>, fecha que estableció como extremo inicial, concluyendo que al no haberse fijado su duración, se entendía a término indefinido.** Lo cual si bien comparte esta judicatura, también lo es que, **se allegó por la misma parte actora, otro contrato de trabajo, este sí suscrito por ambos**, en el cual se indicó como inicio de labores el día 28 de abril de 2012 y de terminación el 30 de diciembre del mismo año<sup>3</sup>; es decir, las partes suscribieron un nuevo contrato laboral, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de los contratantes, ya que no les está vedado cambiar la modalidad contractual. Recuérdese que un vínculo puede terminar hoy y mañana iniciarse uno nuevo con el mismo empleador, sin que las dos relaciones laborales puedan estimarse como una misma; así lo ha sostenido la jurisprudencia:

*“El contrato laboral con un asalariado puede terminar en día determinado, y al siguiente empezar a ejecutar el mismo dependiente un nuevo contrato de trabajo con el mismo patrono, sin que las dos relaciones laborales puedan estimarse como una misma; tratándose, por consiguiente, de dos contratos diferentes” (Sent. 25 de junio de 1962, G. J., XCIX, p. 553).*

Atendiendo a lo anterior, **se concluye que la demandante y el señor Arbey de Jesús Herrera Agudelo estuvieron unidos mediante dos contratos de trabajo, uno entre el 11 y el 27 de abril de 2012 y otro contrato escrito a término fijo a partir del 28 del mismo mes y año, el cual se prorrogó hasta el 6 de mayo de 2017**, existiendo sustitución patronal el 2 de abril de 2013 con Camilo's SPA S.A.S. y a partir del 30 de abril de 2015 con La Casa

---

<sup>2</sup> Sólo aparece suscrito por la demandante -Folios 22 a 24 del expediente digital-

<sup>3</sup> Folios 25 a 26 del expediente digital

de la Belleza Francesa S.A.S. -; **modalidad de contrato que la misma parte actora en la demanda solicita se declare, siendo además aceptado por ésta en su interrogatorio de parte.** Debe anotarse que **se allegó un contrato a término indefinido** fechado el 01 de octubre de 2015, **pero no está suscrito por ninguna de las partes y fue desconocido por la demandada** –no tenido en cuenta porque no está probado-.

Así las cosas, **se modificará decisión de Primera Instancia, en cuanto a la modalidad de contrato de trabajo que existió entre las partes, en los términos antes indicados.**

## **2° Intereses sobre las cesantías y primas de servicio:**

**Aduce la recurrente con relación a los intereses sobre las cesantías y primas de servicios,** que *se demostró con las planillas y recibos, que fueron pagados en efectivo, confesando la demandante en su interrogatorio de parte, que ella misma se pagaba ese concepto y en cuanto a la prima de servicios, afirma que, si bien se dio una mala praxis, también lo es, se admitió que la demandante se la pagaba en efectivo, de lo cual da cuenta las planillas, a las cuales se restó valor probatorio; **encontrando esta Magistratura que le asiste razón, toda vez que tal como lo concluyó el a quo, la prueba documental, interrogatorio de parte de la demandante y testimonial da cuenta de una indebida forma de pago de prestaciones sociales por parte de la sociedad empleadora,** ya que las mismas **sí se pagaban a la demandante y demás trabajadores - en forma anticipada,** junto con el pago de salarios y aportes a la seguridad social, **tal como se constata en las planillas de nómina aportadas por la parte***

**demandada<sup>4</sup>, las cuales no fueron tachadas por la parte actora; información que también se corrobora con declaración de la señora Ángela María Arango Toro, contadora en la demandada,** quien explicó que la nómina se pagaba de manera semanal y había una casilla denominada prestaciones sociales donde estaban incluidas; señalando que a principio de año cuando cambiaba el salario, ella entregaba un cuadro con el costo mensual de las prestaciones sociales de cada trabajador, salarios y auxilio de transporte, sin incluir la seguridad social, indicándose los porcentajes mensuales de las cesantías y prima de servicios, que como el pago era semanal se dividía por 30 y se multiplicaba por 7 y se entraban esos valores por concepto de prestaciones como un préstamo que se descontaban al momento de la liquidación.

**En lo que es punto de análisis, el codemandado Arbey de Jesús Herrera Agudelo en su interrogatorio de parte,** explicó que a la demandante se le indicó desde el principio que se le pagaba todo junto, pues cuando él empezó con el salón de belleza: *“alguien lo asesoró y me dijo que yo podía pagar a los empleados sueldo, liquidación y prestaciones al mismo tiempo”*; que luego se quiso cambiar esa forma de liquidación de nómina y hacerlo por separado, pero fue difícil porque el sueldo era menos y de hecho la demandante, quien estaba en la parte administrativa, encargada de los pagos, le manifestó que los empleados se iban a ir si les cambiaban la forma de cancelación y por eso se vio presionado a seguir pagando de esa forma.

**Y la demandante, señora Diana Marcela Casas Ruiz, en**

---

<sup>4</sup> Folios 152 a 179 del expediente digital.

su interrogatorio de parte manifestó **que era la encargada, entre otras actividades, del pago de nómina** y en ocasiones la hermana de Camilo; que ella **no tuvo conocimiento de la forma como se le pagaba hasta que empezó a estudiar** y se dio cuenta que el salario integral eran muchos salarios mínimos; que cuando ella entró a laborar se le dijo por parte del hermano del codemandado, **que no se pagaban prestaciones porque todo estaba incluido y ella aceptó porque no tenía conocimiento del tema**; que cuando finalizó el vínculo recibió sólo \$36.000,00 que le quedaban de las vacaciones y ella le escribió al demandado quien le dijo que ella era consciente de cómo era el salario y que no tenía derecho a liquidación porque se le pagaba todo incluido.

Además de lo expuesto, esta Magistratura constató **en las planillas de nómina aportadas por la parte demandada<sup>5</sup> y efectivamente se observa el pago porcentual de las prestaciones, realizando una operación aritmética para establecer el valor porcentual de las prestaciones sociales por los días pagados lo cual arrojó un valor inferior al reconocido.**

En el presente asunto el *a quo* condenó al reconocimiento de todas las prestaciones aduciendo que al haberse efectuado un pago inadecuado de las mismas por el empleador debía cancelarlas nuevamente, argumento que no comparte esta Sala de Decisión, pues ello sólo procede respecto de las cesantías, conforme lo establece el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo y no respecto de las primas de servicio e intereses sobre las cesantías; **así las cosas, se revocará la condena impuesta por concepto de**

---

<sup>5</sup> Folios 152 a 179 del expediente digital.

**primas de servicio e intereses sobre las cesantías.****3° Dictamen pericial:**

Afirma la apoderada **recurrente** que, *del dictamen sobre la tacha de falsedad de los documentos aportados, se puede concluir que se presumen auténticos; por lo cual considera que esos pagos presentados como prueba, al no existir una respuesta contundente de tachar los documentos se deben valorar como documentos auténticos por cuanto los pagos se hicieron.*

Al respecto debe aclararse que **las pruebas escritas objeto de tacha, corresponden sólo a las liquidaciones de prestaciones sociales allegadas por la demandada visibles a folios 118 a 122 del expediente digital**; documentos sobre los cuales el **perito grafólogo** concluyó en su dictamen<sup>6</sup>:

*“Si bien, como lo manifesté y se puede visualizar en los registros fotográficos - CUADROS COMPARATIVOS - se hallaron relativas semejanzas en el componente morfológico entre unas y otras grafías - signets y signos numéricos - (dubitadas y genuinas), las que no son suficientes para afirmar de manera terminante, que los grafismos cuestionados correspondan o no al desenvolvimiento caligráfico de la señora Diana Marcela Casas, ello en razón, precisamente a la condición de reproducciones (fotocopias) en las que se arrimaron al proceso, que como lo sustente, impiden el examen de aspectos y sub aspectos grafonómicos de suma relevancia en el proceso de identificación de manuscritos, y en consecuencia, no es factible establecer con la objetividad y certeza requerida, la autoría de las muestras problema.”*

De lo expuesto por el auxiliar de la justicia, con el material documental presentado, constituido por fotocopias, **no puede resolver la tacha de falsedad propuesta por la parte actora<sup>7</sup>, al**

<sup>6</sup> Folios 205 a 210 del expediente digital.

<sup>7</sup> Ya que según explica el perito, sobre las fotocopias convergen una serie de dificultades que no permiten emitir de manera categórica y contundente la autoría de las grafías, al poderse presentar la posibilidad latente de que los



**requerirse los documentos originales**, los cuales no fueron aportados, pese haberse requerido a la parte demandada (quien desde la respuesta a la demanda afirmó haberse perdido la carpeta correspondiente a la demandante). Por tanto, no prosperó la tacha de dichos documentos, pero al perito no tener un dictamen que resuelva de fondo sobre la misma y oponerse a su autenticidad la parte demandante, el valor probatorio de dichos documentos debe ser respaldado por otras pruebas. Y de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 del Código General del proceso “*es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado*” y se presumen auténticos los documentos privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, “*mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso*”. Por lo tanto, **no puede acceder esta Colegiatura a la solicitud de la recurrente de presumir auténticos los documentos objeto de tacha - las pruebas escritas objeto de tacha, correspondientes sólo a las liquidaciones de prestaciones sociales allegadas por la demandada, visibles a folios 118 a 122 del expediente digital -**, debiendo ser analizadas en conjunto con otras pruebas arrimadas al proceso.

Es de advertirse, que el *a quo* en su decisión no hizo referencia a la figura del *in dubio pro operario* –como lo afirma la parte demandada en sus alegatos de conclusión–, sin que pueda hacerse uso de la misma en los términos anotados por ésta, toda vez que como se precisó por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala

---

grafismos cuestionados hayan sido el resultado de una buena imitación directa, bajo la modalidad de libre o por asimilación de grafía, realizada por un imitador avezado o también la posibilidad de que las grafías en duda hayan sido fruto de maniobras mecánicas, mediante el uso de scanner de alta resolución o de montaje hecho a través de fotocopidora, o una máquina para dibujar o escribir (AXIDRAW), todo ello a partir de la obtención de muestras de referencia, que posteriormente son plasmadas en los documentos destino.

de Casación Laboral, en la Sentencia SL 854 de 2013 *“la duda con base en los principios de favorabilidad o in dubio pro operario, es respecto de normas jurídicas y no frente a la que pueda surgir de la valoración de los medios probatorios”*.

#### 4° **Indemnizaciones moratorias:**

Respecto a la condena a las indemnizaciones moratorias, aduce la apoderada que *su mandante siempre actuó en todo momento de buena fe, aclarando que el utilizar esa mala praxis a petición de los trabajadores, no da lugar a considerarse hay mala fe. Conforme al postulado constitucional, el principio de la buena fe es la guía de supremacía sobre cualquier supuesto quebranto del obrar humano y la jurisprudencia ha entendido ese principio como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las autoridades públicas, así como entre los particulares y ante aquellas; buena fe que se presume y constituye un soporte esencial del sistema jurídico, siéndole exigible al empleador actuar como un buen padre de familia y en su entender así lo hizo, por requerimiento de su propia trabajadora.*

Frente a los argumentos de la recurrente, encuentra esta Magistratura que de manera reiterada y pacífica, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha indicado que **las indemnizaciones por mora** que se encuentran establecidas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, **no son de imposición automática**, en la medida en que, dado su carácter sancionatorio, es preciso auscultar la conducta asumida por el empleador, con la finalidad de constatar si demuestran razones serias y atendibles que justifiquen su conducta omisiva y lo ubiquen en el terreno de la buena fe; al

respecto ver las Sentencias SL 023 de 2022, SL 3288 de 2021 y la SL 3123 de 2020, entre otras.

En la Sentencia SL 1130 del presente año 2023, en la cual se reitera la SL 2175 de 2022, la H. Corte señaló que “**...la indemnización moratoria constituye una pretensión autónoma, comporta una condena adicional a las requeridas que si bien se deriva del no pago de prestaciones sociales, no se encuentra implícita en ellas y, por el contrario, requiere de una valoración jurídica y probatoria por parte del juez. No es inescindible ni consustancial, al pago de prestaciones sociales, como tampoco opera de manera automática frente a la indebida liquidación**” (Negritas y subrayas fuera del texto).

Por su parte en Sentencia SL 312 de 2020, señaló que **no existe una presunción de la mala fe del empleador, pues ello resulta contrario a los postulados del artículo 83 de la Constitución Política.**

Y en la Sentencia SL 2175 de 2022, reiterando su jurisprudencia la H. Corte precisó que la buena fe “*equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, **se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador, de que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin probidad o pulcritud***” (Negritas y subrayas fuera del texto). Y la Sala de Casación Civil en la Sentencia SL 2210 de 2018, reiterando jurisprudencia indicó que “**se entiende que actúa de mala fe “quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud”** (Negritas fuera de texto).

**En el asunto debatido, tal como se explicó en los acápites anteriores, la prueba documental, interrogatorio de parte de la demandante y testimonial da cuenta de una indebida forma de reconocimiento de las prestaciones sociales por parte de la sociedad empleadora, ya que las mismas **sí se pagaban a la demandante** y demás trabajadores - **en forma anticipada**, junto con el pago de salarios y aportes a la seguridad social, por lo que no estamos en presencia de una omisión en el reconocimiento de las prestaciones sociales que es lo que da lugar a la indemnización pretendida.**

**En cuanto a la omisión de consignación de las cesantías en un Fondo, en el caso bajo análisis, la actitud asumida por el empleador encaja en la buena fe**, ya que si bien es cierto no fueron consignadas las cesantías, también lo es que no se quedó con ellas, sino que se hizo una cancelación anticipada y dividido, cuando el período de pago ante el fondo respectivo iba hasta antes del 15 de febrero de cada año, por la liquidación del año calendario anterior o por fracción; sin que tal irregularidad tenga la intención de defraudar a la trabajadora, ni lucrarse o beneficiarse de alguna manera con su actuar o desconocer derechos laborales de la misma.

**En cuanto al pago irregular de las cesantías, omitiéndose la consignación de las mismas, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, en la Sentencias SL 2061 de 2020 precisó que la sanción específica es la establecida en el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, la pérdida de lo pagado por ese concepto;**

veamos:

*“La obligación de pago de esta prestación social recae sobre el empleador, quien de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 debe consignar su valor liquidado antes del 15 de febrero del año siguiente, en una cuenta individual que para tales efectos escoja el trabajador en un fondo de cesantía.*

***Sin embargo, puede ocurrir que el empleador incurra en el pago irregular de esta prestación, esto es, que no las consigne en un fondo, sino que las entregue directamente al trabajador. Para esta clase de situaciones que no siguen los lineamientos que al respecto ha señalado la ley laboral, existe una sanción específica que se encuentra en el artículo 254 del C.S.T. y que lo es la pérdida de lo pagado por ese concepto.”***

De igual forma en la referida providencia, así como en la SL 1735 de 2014 y en Radicado 27186 del 26 de septiembre de 2006, la H. Corte, señaló que **las sanciones establecidas en el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo por el pago parcial de cesantías y la moratoria señalada en el artículo 65 *ibídem*, no concurren; toda vez que la cancelación irregular de cesantías parciales no ocasiona ningún perjuicio al trabajador, teniendo en cuenta que aquél las ha recibido y usufructuado;** veamos:

*“El artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los patronos, bajo sanción de perder lo que hayan pagado, efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados. Con esta sanción no puede concurrir la indemnización del artículo 65, porque esta última tiene por objeto y finalidad resarcir los perjuicios que el patrono le haya podido causar al trabajador con el no pago oportuno de los salarios y prestaciones debidos, y en el caso del pago irregular de cesantía parcial ningún perjuicio se le ha ocasionado al trabajador cuando éste efectivamente ha recibido anticipos por ese concepto, de los cuales se ha usufructuado. Entonces no cabría en rigor jurídico hablar de indemnización, como lo hace el artículo 65, porque ésta sólo se debe cuando se han causado perjuicios a una persona.*

Es de advertirse que en aras de la discusión y entendiéndose que procederían las indemnizaciones, ellas no concurren simultáneamente, por cuanto la sanción por no consignación de cesantías solo puede generarse durante la vigencia del contrato de trabajo y desde este momento se genera la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando el empleador mantiene deudas por pago de salarios y prestaciones; así lo ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras en la Sentencia SL 417 de 2021, en que se reiteran la SL 4260 y SL 3614 del año 2020.

Así las cosas, en este caso la conducta del empleador encaja en un actuar de buena fe y por tanto, **se revocarán las condenas relativas al pago de las indemnizaciones consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990** y en su lugar se absolverá a la parte demandada de las mismas; siendo procedente, **modificar** la Sentencia de Primera Instancia que por vía de Apelación se conoce.

### **COSTAS:**

**No se condenará en Costas en esta Segunda Instancia** al haber prosperado parcialmente el recurso de Apelación; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

## **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: MODIFICAR** la Sentencia de Primera Instancia, que por vía de **Apelación** se revisa, **declarándose** que la demandante **DIANA MARCELA CASAS RUIZ** y el señor **ARBEY DE JESÚS HERRERA AGUDELO**, estuvieron unidos mediante dos contratos, uno entre el 11 y el 27 de abril de 2012 y a partir del 28 del mismo mes y año, mediante un **contrato a término fijo** - el cual se prorrogó hasta el 6 de mayo de 2017, existiendo sustitución patronal el 2 de abril de 2013 con Camilo's SPA S.A.S. y a partir del 30 de abril de 2015 con **LA CASA DE LA BELLEZA FRANCESA S.A.S. -; REVOCÁNDOSE** las condenas relativas al pago primas de servicios, intereses a las cesantías y las indemnizaciones moratorias consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990 y en su lugar se **ABSUELVE** a la sociedad demandada; **CONFIRMÁNDOSE la decisión en todo lo demás.** Lo anterior de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

**SEGUNDO: No se CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia,** según lo indicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**Las Magistradas,**



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL





**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SECRETARIA SALA LABORAL  
EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido Sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:**

<b>Proceso</b>	: Ordinario de Segunda Instancia
<b>Demandante</b>	: <b>DIANA MARCELA CASAS RUIZ</b>
<b>Demandados</b>	: <b>LA CASA DE LA BELLEZA FRANCESA S.A.S. y ARBEY DE JESÚS HERRERA AGUDELO</b>
<b>Radicado</b>	: <b>05001-31-05-011-2017-00759-01</b>
<b>Providencia</b>	: Sentencia
<b>Temas y Subtemas</b>	: Laboral Individual –Prestaciones sociales, indemnizaciones moratorias-
<b>Decisión</b>	: Modifica Sentencia condenatoria
<b>Sentencia No</b>	: <b>166</b>

**FECHA SENTENCIA:**

25 de agosto de 2023

Fijado hoy martes 29 de agosto de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado hoy martes 29 de agosto de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**